



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64)
ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL
CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ - SECCIÓN
TERCERA**

Bogotá D.C., veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

JUEZ	Magda Cristina Castañeda Parra
Ref. Expediente	110013334-064-2020-00127-00
Demandante	Javier Padilla y otros
Demandado	Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación

REPARACIÓN DIRECTA
ADMITE DEMANDA

I.- OBJETO DEL PRONUNCIAMIENTO

Procede el Despacho a admitir la presente demanda, en razón a que se cumplen los presupuestos procesales de los artículos 159 a 167 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

II.- ANTECEDENTES

Los señores **Javier Padilla, Andrea Patricia Quevedo** quienes actúan en nombre propio y en representación del menor **Sebastián Darío Padilla Quevedo; Yeimy Natalia Padilla Quevedo, Martha Johanna García Clavijo, Lucila Padilla Quevedo, Saida Patricia Quevedo padilla, Yury Marcela Quevedo Padilla, Juan Camilo Quevedo Padilla, Jairo Augusto Quevedo Padilla** interpusieron a través de apoderado judicial demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa, en contra de la **NACIÓN- RAMA JUDICIAL y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN**, con el fin de que se declare su responsabilidad patrimonial como consecuencia de los perjuicios materiales, morales a la vida en relación producidos por la privación injusta de la libertad a la que fue sometido el ciudadano JAVIER PADILLA, entre los días 6 de julio de 2011 al 1º de octubre de 2013.

El 11 de febrero de 2021, este Despacho inadmitió la presente demanda por cuanto no se aportaron los poderes de las personas que integran el extremo activo; asimismo no se especificaron los hechos u omisiones respecto de cada una de las demandadas y que comprometen su responsabilidad patrimonial.

El día 26 de febrero de la presente anualidad, la parte demandante allegó escrito de subsanación a la demanda tal como consta a folio 9 y 10 CD.

Para resolver sobre la admisión de la demanda, el Despacho estudia lo siguiente:

III.- CONSIDERACIONES

3.1.- JURISDICCIÓN

Con la presente demanda, la parte actora está ejerciendo el medio de control de reparación directa, pretendiendo que las demandadas sean declarada extracontractualmente responsables como consecuencia de los perjuicios materiales, morales y a la vida en relación producidos por la judicialización y privación injusta de la libertad de la que fue víctima el ciudadano Javier Padilla por la presunta comisión del delito de rebelión.¹

3.2.- COMPETENCIA

Este Despacho de la Sección Tercera de la oralidad, tiene competencia para conocer en primera instancia la presente demanda de reparación directa, en virtud de lo dispuesto en el numeral 6° del artículo 155 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) y como quiera que el monto de la pretensión mayor por concepto de perjuicios materiales hasta la presentación de la demanda², no supera el límite de los 500 s.m.m.l.v. allí establecidos, por cuanto se cuantificaron en la cantidad de 100 smlmv monto que no supera el tope legal. (fl. 3 2-5 escrito de demanda CD)

Y en cuanto al factor territorial, el numeral 6° del artículo 156 del CPACA establece que la competencia se determina por el lugar donde se produjeron los hechos, las omisiones o las operaciones administrativas, o por el domicilio o sede principal de la entidad demandada a elección del demandante.

¹ Artículo 104. De la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa. Igualmente conocerá de los siguientes procesos: 1. Los relativos a responsabilidad extracontractual de cualquier entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable. (...)

² Además, se solicitaron perjuicios de carácter inmaterial, que no determinan la competencia por el factor cuantía en el presente evento.

3.3.- OPORTUNIDAD

De conformidad con lo dispuesto en el literal i) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA, frente a la demanda en ejercicio de la pretensión de reparación directa, establece las reglas que han de tenerse en cuenta para el efecto. Concretamente el término es de dos (2) años que se contarán: *“a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño, o de cuando el demandante tuvo o debió tener conocimiento del mismo si fue en fecha posterior y siempre que pruebe la imposibilidad de haberlo conocido en la fecha de su ocurrencia”*.

La parte actora indicó que el daño ocasionado al señor Javier Padilla, se deriva de la privación injusta de la libertad con ocasión del proceso penal adelantado en su contra.

En tal sentido y para el caso concreto se tiene en cuenta la fecha de en que quedó en firme la sentencia de preclusión de la investigación, es decir el **6 de abril de 2018**³; luego, el término de caducidad se empezará a contar a partir del día siguiente, esto es, a partir del día 7 de abril de 2018.

Se tiene por tanto que el cómputo del término de caducidad inició el 7 de abril de 2018, luego el término de los dos (2) años venció en principio el **7 de abril de 2020**.

También debe tenerse en cuenta la suspensión de términos judiciales realizada por el Consejo Superior de la Judicatura mediante el Acuerdo PCSJA20-11518, en virtud de la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional, a partir del 16 de marzo de 2020, suspensión levantada el 1º de julio de 2020 mediante el Acuerdo PCSJA20-11567 del 5 de junio de 2020

La demanda fue presentada el día **27 de agosto de 2020** (fl. 4); por lo anterior, se concluye que se hizo oportunamente.

Además, debe tenerse presente que se cumplió con el requisito de procedibilidad para acudir ante la jurisdicción, (Ley 640 de 2001, en concordancia con el artículo 42 A de la Ley 270 de 1996, adicionado por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009).⁴ El término para incoar la demanda se suspendió desde el momento en que se presentó la conciliación prejudicial

³ Página 24.

⁴Adicionado por el art. 13, Ley 1285 de 2009, así: Conciliación judicial y extrajudicial en materia contencioso-administrativa. A partir de la vigencia de esta ley, cuando los asuntos sean conciliables, siempre constituirá requisito de procedibilidad de las acciones previstas en los artículos 85, 86 y 87 del Código Contencioso Administrativo o en las normas que lo sustituyan, el adelantamiento del trámite de la conciliación extrajudicial.”

hasta que se agotó la misma (26 de julio de 2019 al 07 de octubre de 2019), como lo establece el artículo 21 de la Ley 640 de 2001⁵.

3.4.- REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

La parte actora demostró el cumplimiento de lo establecido en el numeral 1° del artículo 161 del CPACA, al haber agotado el requisito de procedibilidad consistente en la conciliación extrajudicial en derecho, allegando la constancia vista en las pruebas allegadas con el escrito de demanda emitida por la PROCURADURÍA 50 JUDICIAL II ADMINISTRATIVA, que da cuenta que la parte demandante convocó a las demandadas. Conciliación que resultó fallida por falta de ánimo conciliatorio.

3.5.- LEGITIMACIÓN

Por Activa: En el presente caso se advierte que los demandantes **Javier Padilla, Andrea Patricia Quevedo quienes actúan en nombre propio y en representación del menor Sebastián Darío Padilla Quevedo; Yeimy Natalia Padilla Quevedo, Martha Johanna García Clavijo, Lucila Padilla Quevedo, Saida Patricia Quevedo padilla, Yury Marcela Quevedo Padilla, Juan Camilo Quevedo Padilla, Jairo Augusto Quevedo Padilla,** se encuentran legitimados en la causa por activa por cuanto actúan en calidad de víctima directa de las lesiones y familiares, respectivamente.

Por pasiva: De conformidad con la situación fáctica en que se fundamentó el presente medio de control, se establece que la causación del presunto daño antijurídico, guarda relación con los perjuicios sufridos por el señor Javier Padilla, al ser víctima de una presunta privación injusta de la libertad, la cual culminó con la sentencia del 6 de abril de 2018. En ese sentido las entidades demandadas se encuentran legitimadas de hecho por pasiva.

3.6.- REQUISITOS FORMALES

La demanda también cumple con los requisitos de los artículos 162 y 163 del C.P.A.C.A., relacionados con la designación de las partes y sus representantes; las pretensiones expresadas de manera clara y precisa; los hechos y omisiones en que se fundamentan; los fundamentos de derecho que las soportan; la solicitud de pruebas que se quieran hacer valer y; el lugar y dirección donde las partes recibirán las notificaciones personales.

⁵“Suspensión de la prescripción o de la caducidad. La presentación de la solicitud de conciliación extrajudicial en derecho ante el conciliador suspende el término de prescripción o de caducidad, según el caso, hasta que se logre el acuerdo conciliatorio o hasta que el acta de conciliación se haya registrado en los casos en que éste trámite sea exigido por la ley o hasta que se expidan las constancias a que se refiere el artículo 2 de la presente ley o hasta que se venza el término de tres (3) meses a que se refiere el artículo anterior, lo que ocurra primero. Esta suspensión operará por una sola vez y será improrrogable”.

Igualmente se acompañó copias de la demanda y sus anexos para la notificación a las partes, al Ministerio Público y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

Entonces, como revisado el contenido de la demanda y de sus anexos, se advierte que ésta reúne los requisitos para que la misma sea admitida, se procederá en tal sentido.

En consecuencia, el **JUZGADO SESENTA Y CUATRO (64) ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C.**,

RESUELVE:

1.- Se ADMITE la presente demanda de reparación directa presentada por **Javier Padilla, Andrea Patricia Quevedo quienes actúan en nombre propio y en representación del menor Sebastián Darío Padilla Quevedo; Yeimy Natalia Padilla Quevedo, Martha Johanna García Clavijo, Lucila Padilla Quevedo, Saida Patricia Quevedo padilla, Yury Marcela Quevedo Padilla, Juan Camilo Quevedo Padilla, Jairo Augusto Quevedo Padilla**, contra la **Nación- Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación**.

2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE al **Director Ejecutivo de Administración Judicial y al señor Fiscal General de la Nación**, o quienes hagan sus veces, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, Modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y artículo 48 de la Ley 2080 de 2021. A la parte actora notifíquese por anotación en estado.

Es de advertir que, la notificación se entenderá surtida con el envío de la demanda y sus anexos a la dirección de correo electrónico para notificaciones judiciales (Art.. 197 de la Ley 1437 de 2011)

3.- NOTIFÍQUESE al señor **AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO y a la AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO**, conforme a lo dispuesto en el artículo 199 del CPACA, Modificado por el artículo 612 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y el artículo 48 de la Ley 2080 de 2021.

4.- CÓRRASE TRASLADO de la demanda a la parte demandada por el término de TREINTA (30) DÍAS de conformidad con lo preceptuado en el artículo 172 del CPACA.

5.- ADVERTIR a las demandadas que conforme a lo dispuesto por el numeral 4º y el parágrafo 1º del artículo 175 de la Ley 1437 de 2011, deberán allegar


con la contestación de la demanda **todas las pruebas que pretendan hacer valer y que reposen en su poder.**

6.- ADVERTIR también a las partes, que conforme dispone el artículo 78 numeral 10° del CGP, es su deber abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio del derecho de petición hubieren podido conseguir. Lo anterior, en armonía con lo previsto en el artículo 173 del mismo estatuto, según el cual el juez se abstendrá de ordenar decreto de tales probanzas, salvo que la parte hubiera presentado petición para ello y no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.

7.- ADVERTIR a las partes que, toda actuación que se adelante en el presente trámite mientras dure la emergencia declarada por el Gobierno Nacional en virtud de la pandemia de COVID – 19, deberá remitirse únicamente al correo correscanbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

8.- Se reconoce personería a la doctora **Sandra Jimena Rubiano Benitez**, identificada con cedula de ciudadanía No. 65.775.186 y T.P. No. 189.272 del C.S de la Judicatura, como apoderado de la parte demandante en los términos de los poderes visibles en el CD anexo (Demanda y Subsanción) y que hacen parte integra del expediente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



MAGDA CRISTINA CASTAÑEDA PARRA
JUEZ

jd/r